El Mercado Común Europeo: posibles repercusiones en la construcción

Parece obligado que ahora que en todas partes se oye eso de Mercado Común también echemos nuestro cuarto a espadas y tratemos de analizar qué es "eso" y qué puede reportarnos en un futuro a los ligados al sector de la Construcción, la incorporación de España a la Comunidad Económica Europea o Mercado Común.

En la psicosis de Mercado Común existente hoy día es fácil oír en cualquier parte que se vaya expresiones peyorativas como éstas: "Ahora que vamos a entrar en el Mercado Común volveremos a ser un país agrícola" o "emigraremos todos, pues aquí no va a quedar ni una rata". Casi seguro que esas personas no conocen ni la estructura de la Comunidad Económica Europea ni tan siquiera el estado actual de cosas en la misma.

¿Qué es lo que ha hecho España no hace aún dos meses? Sencillamente pedir entablar negociaciones con vistas a la incorporación a dicha C.E.E. Con ello de momento sólo hemos hecho "ponernos en la cola". Nos preceden varias naciones (Inglaterra, Irlanda, Dinamarca, Austria, etc.), y en tanto no se resuelvan sus casos esperaremos. ¿Cuánto tiempo? Quién sabe, pero seguro que pasan más de dos años antes de nada.

Por eso queda la esperanza de que cuando llegue el momento de entablar conversaciones para negociar en qué condiciones y plazos nos hayamos de sumar al actual bloque de los "seis", ya sepamos todos qué es y cómo funciona el Mercado Común.

Al hablar de este tema que ya empieza a estar maldito no quisiéramos ser pesados cayendo en enumeraciones y aclaraciones que pormenoricen demasiado el concepto, aunque es inevitable un poco de esto si queremos darnos idea clara del asunto. Por ello empezaremos por el principio, que aquí fueron los tiempos de la posguerra. Es aleccionador ver cómo Europa, que había luchado dividida para lograr una hegemonía económica y política, piensa rehacerse acudiendo a la fusión de los diversos mercados nacionales, como único medio de mantener el ritmo de expansión al nivel suficiente para enfrentarse a mercados tan fuertes como el norteamericano y el soviético. De este deseo de unión son muestra las distintas asociaciones de toda índole que empiezan a surgir con los más diversos

resultados. Así nacieron en primer lugar el "Benelux", a fines de 1944, que era una Unión aduanera belgo-holandesa-luxemburguesa; "Uniscán" (Convenio económico anglo-escandinavo); "Fritalux" (Francia, Italia, Benelux), etc., todas con el ansia de recuperar y superar el nivel de la anteguerra.

Avanzando en esta idea llegamos al año 1948 en el que nace en París—en una Conferencia llamada de los dieciséis—, la Organización Europea de Cooperación Económica (O.E.C.E.), en cuyo encuadre se previó un sistema de "clearing" intereuropeo que sería sucedido en seguida por la Unión Europea de Pagos (U.E.P.).

Un paso trascendental es la creación de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (C.E.C.A.), Asociación que ha sobrevivido a otras similares como el "pool" de los transportes, de la agricultura ("pool" verde), Comunidad Europea de la Salud, etc., y en cuyo marco nacieron el Mercado Común y la Euratom u Organización Europea para la explotación pacífica de la energía atómica.

Vemos, pues, cómo la evolución de estas corrientes unificadoras conduce a la suscripción, en marzo de 1957, de un Tratado creando la Comunidad Económica Europea o Mercado Común.

¿Qué es, pues, el Mercado Común? Es una Asociación de seis países europeos—Alemania, Francia, Italia, Bélgica, Holanda y Luxemburgo—con el objeto de lograr una gran zona de política económica que forme una unidad de producción para poder conseguir una expansión rápida y continua dentro de un marco estable, que conduzca a un incremento importante y constante del nivel de vida y a un desarrollo ordenado de las relaciones entre los seis Estados miembros. Ello se alcanzará mediante la fusión de los distintos mercados nacionales estableciendo unas condiciones normales de competencia que supriman, por etapas sucesivas, las protecciones que puedan obstaculizar los cambios, y también creando unas normas que eviten el efecto de las intervenciones gubernamentales y las situaciones de monopolio, comprometiéndose a una acción común que elimine las dificultades de las balanzas de pagos.

Esta Unión no llegará a ser total más que después de un período transitorio dividido en tres etapas y que puede abarcar un plazo entre los doce y los diecisiete años, debido a las distintas estructuras económico-sociales de los países miembros.

Vamos ahora a analizar, aunque sea por encima, algunas de las disposiciones generales del Tratado que han de permitir la total unión al cabo de las tres etapas transitorias. Son éstas:

1

Unión aduanera y supresión paulatina de los derechos de Aduanas sobre el conjunto de producciones dentro de la C.E.E. Esto supone un estudio dentro de cada uno de los seis países de todos sus productos para clasificarlos, según el tipo de derechos con que están gravados, con objeto de ir calculando el tipo de reducción media a lo largo de los distintos períodos de readaptación, hasta lograr la total supresión de los derechos de Aduanas en el interior de la comunidad.

2

Establecimiento progresivo en el curso del período transitorio de un arancel de Aduanas común aplicable a los demás países. Esta disposición es complementaria de la anterior. Aquí aparece un dilema importante, cual es si se mantendrá ese único arancel con los países ajenos a los "seis", o si se permitirá algún trato preferencial con determinado sector, al menos durante el período de transición, como puede ocurrir con los territorios franceses de Ultramar (T.O.M.).

Después de ver estos dos puntos conviene hacer una salvedad que nos va a permitir conocer otra de las figuras que también anduvo en boga, esto es, la Zona de Libre Cambio. A propuesta de Gran Bretaña, ésta comprendería, además de los "seis" y de la propia Gran Bretaña, Irlanda, Islandia, Noruega, Suecia, Dinamarca, Suiza, Austria, Portugal, Grecia y Turquía. Esta asociación de países propugnaba una supresión de las barreras aduaneras. Ahora bien: su diferencia con la Unión aduanera de los "seis" es que en ésta existe un arancel único frente a terceros, mientras que los miembros de la zona de libre cambio conservarían sus propios aranceles. La diferencia es, pues, sustancial.

3

Supresión progresiva de los contingentes de importación en el interior del Mercado Común, que se llevará a cabo de acuerdo con el sistema de la O.E.C.E., con la excepción de los productos agrícolas, ya que éstos dependerán de una organización especial establecida desde el período preparatorio.

4

Eliminación de cualquier discriminación en la elección del proveedor o del cliente. Esta es una cláusula dirigida abiertamente para impedir prácticas de monopolio que puedan adulterar el juego de la competencia. En ella se regula también la manera de evitar que se favorezcan estatalmente por medio de auxilios o protecciones, determinadas actividades que falseen la libre competencia.

5

Unificación de las legislaciones, referida, claro está, a las disposiciones legislativas en materia de competencia entre las ramas de actividad de las distintas economías nacionales. A la vista de las legislaciones de los seis países, donde se observan mayores discrepancias es en lo referente a los regímenes de financiación de la Seguridad Social, y luego, ya en tono menor, en aspectos varios como condiciones de trabajo, política crediticia, fiscalidad directa e indirecta, etc.

Ya en la primera etapa Francia, que es la que más se preocupa de estas cuestiones, ha conseguido imponer sus criterios. En efecto es un hecho ya la igualación de salarios del hombre y de la mujer en trabajos idénticos, así como la retribución a seguir en las horas extraordinarias. Es muy interesante ver cómo se compensan las distintas ventajas sociales que las legislaciones de los distintos países miembros conceden a sus obreros. Ello confirma que la idea de la supranacionalidad que parece asustar a muchos, no anula totalmente las distintas políticas nacionales, siempre que éstas tiendan a conseguir por el camino que sea, los objetivos señalados. Así vemos cómo en materia social las ventajas se han equiparado, pues si Francia tiene un sistema de auxilios familiares más amplio, no soporta las cargas, por ejemplo, que soporta la economía italiana con el paro obrero, ni la belga de jubilaciones y ayuda médica.

6

Preparación de una Organización común del mercado agrícola.—Ya que la unión aduanera a alcanzar ha de ser total, esto es, que se aplicará por igual a los productos agrícolas e industriales, desapareciendo los derechos aduaneros en vigor para ambos, hay que mirar con especial interés los problemas que plantearán las distintas agriculturas. Es tan importante este aspecto y tan grande su trascendencia que aún está en su fase preparatoria la política agrícola común de la C.E.E. No sería de extrañar que en las discusiones que se producirán entre los "seis" sobre la definición de

una política agraria común y su posterior realización, se tengan en cuenta intereses particulares de los posibles miembros futuros de la Comunidad. Pensemos la vital importancia que para países como Irlanda, Dinamarca e incluso España, ha de tener dicha política agraria común.

7

Reglamentación de los servicios.—Atañe principalmente esta disposición a la progresiva modificación de las tarifas de transportes, y se inspira en los métodos empleados por la C.E.C.A. para el carbón y el acero.

8

Equilibrio de las balanzas de pagos de los países miembros.—Para lograr dichos equilibrios se recurrirá a idénticos medios de los usados en la Unión Europea de Pagos, y también utilizando métodos complementarios, como concesión de créditos, ampliación de los contingentes en los períodos transitorios, etc.

9

Fondo de inversiones, cuyo objeto será asegurar el desarrollo equilibrado de todos los países miembros.—Aquí se propugna la puesta en valor de regiones menos favorecidas dentro de la Comunidad. Para formar dicho fondo los seis Estados aportarán un capital fijado en mil millones de dólares en la siguiente proporción: Francia y Alemania, 300 millones cada una; Italia, 225; Bélgica y Holanda, 86,5 cada una, y Luxemburgo, dos millones. Con dicho fondo se procurará la reorientación de las empresas afectadas y la creación de nuevas actividades que se consideren interesantes.

10

Fondo de readaptación de los trabajadores, similar en parte al anterior y nutrido por contribuciones de los distintos Estados con un doble objetivo: poner a cubierto a los obreros afectados por las modificaciones producidas en las estructuras de las empresas (cierre parcial o total), mediante indemnización de paro, traslado a otras regiones, etc., y para pagar los gastos de reeducación profesional si el caso lo precisare.

11

Libre circulación de los trabajadores.—También se aspira a ello, pero de momento se prevén cláusulas

de salvaguardia que eviten que la desmedida afluencia perjudique al nivel de vida o de empleo de otros trabajadores de determinadas industrias o países. Cuando se llegue a la plena libertad, los distintos Estados tendrán que aceptar el principio de la abolición de toda discriminación entre los distintos trabajadores en lo que respecta al empleo, remuneración, condiciones de trabajo, etc., de los trabajadores nacionales con respecto a los extranjeros, pero no se trata de establecer normas uniformes para los salarios y demás condiciones de trabajo en el conjunto de la Comunidad.

12

Libre circulación de los capitales, que permita a los súbditos de cualquier Estado miembro, adquirir y transferir sin restricciones dentro de la comunidad los capitales de la misma. También aquí existen cláusulas de salvaguardia que eviten en los períodos transitorios especulaciones que perjudiquen el equilibrio de pagos.

En conjunto los Estados miembros quedan dueños de su política económica y monetaria, pero tienen la obligación de consultarse regularmente con objeto de asegurar que sus políticas no entorpecen la realización del Mercado Común. Nota interesante en esta materia es que el Tratado declara expresamente no tener intención de atentar en absoluto contra el régimen de propiedad privada en vigor en todos los Estados miembros.

Hasta aquí la enumeración abreviada de las disposiciones generales. Antes de analizarlas desde el ángulo del sector de la Construcción, vamos a completar la descripción del Mercado Común con una breve exposición de sus Organismos rectores. Son éstos:

La Asamblea.—Compuesta por delegados de los distintos países designados de entre los miembros de sus Parlamentos y en la siguiente proporción: Alemania, Francia e Italia, 36 delegados cada uno; Bélgica y Países Bajos, 14 cada uno, y Luxemburgo, seis. Deliberará por mayoría absoluta, salvo algunos casos, y ejercerá los poderes deliberantes y de control.

El Consejo.—Compuesto por un representante de cada Estado. Dispone de poderes de resolución y debe proceder a la coordinación de las políticas económicas generales de los Estados miembros, reuniéndose cuando lo crea necesario alguno de sus miembros, resolviendo por mayoría, salvo también en algunos casos en que precise unanimidad. Para los que sea necesaria mayoría, los votos de cada consejero serán: Alemania, Francia e Italia, cuatro cada uno; Bélgica y Holanda, dos, y Luxemburgo, uno.

La Comisión.—Creada para asegurar el funcionamiento y desarrollo del Mercado Común, velará por la aplicación de las normas aprobadas, formulará recomendaciones e informes cuando lo crea necesario y tendrá poder propio de decisión. Estará compuesta por nueve miembros, sin que pueda haber más de dos de la misma nacionalidad, los cuales trabajarán con absoluta independencia de los Estados miembros, buscando sólo el interés general del Mercado Común.

El Tribunal de Justicia.—Estará compuesto por siete jueces y asistido por los abogados generales salidos de entre los juristas y abogados de más prestigio de los países miembros, y se preocupará de asegurar el respeto en derecho, en orden a la interpretación y aplicación del Tratado. Además ejercerá control de legitimidad sobre los actos del Consejo y de la Comisión distintos a recomendaciones o informes.

Como es lógico, hubo sectores que se llevaron las manos a la cabeza cuando se puso en marcha el Mercado Común y auguraron su más espectacular fracaso. ¿Qué ha pasado al cabo de los cinco años de existencia? En contra de la predicción que aseguraba que la elevación de salarios que supondría el progresivo contacto de economías de niveles distintos, iba a dar al traste con el proyecto provocando una corriente inflacionista, se ha comprobado que la elevación del nivel social ha sido mayor en los seis países que en los demás de Europa y América. El poder de compra del obrero alemán ha subido desde el Tratado de Roma en un 18 por 100; el del holandés en un 14 por 100; el del italiano en un 10 por 100; el francés en un 9 por 100, y el belga en un 5 por 100, mientras que el del norteamericano ha subido sólo un 6 por 100 y el del británico un 4 por 100. Todo esto, claro, acompañado de un aumento de los beneficios empresariales.

¿Cuál es la situación española ante este marco? España para atender a su creciente industrialización necesita comprar maquinaria y utillaje en el exterior, y para pagarlos recurre al turismo por un lado, y a sus exportaciones de productos agrícolas y mineros principalmente por otro. Aparte el turismo que no se vería afectado por una incorporación al Mercado Común, nos quedan las exportaciones que para España tienen esta distribución (tomando la media 1958-60).

Total exportaciones: 570 millones de dólares, de los cuales el 33 por 100 fué a los "seis"; el 16 por 100 a Gran Bretaña; el 10 por 100 a la E.F.T.A. (menos Gran Bretaña); el 2 por 200 a Europa Oriental, y el 39 por 100, al resto del mundo. Si nos quedásemos al margen del Mercado Común, correríamos el riesgo de tropezar con dificultades al no poder hacer frente a la competencia de las exportaciones similares procedentes de países miembros o asociados de la C.E.E.,

principalmente Grecia e Italia. Por el contrario, si nos asociásemos, obtendríamos beneficios sustanciales en tanto en cuanto la política agraria de los "seis" se orientase hacia la liberalización real de los intercambios de productos agrícolas y hortícolas. Es, pues, vital, que antes de pensar en nada concreto sepamos la orientación que ha de tomar la política agraria en el seno del actual C.E.E.

Vamos ahora brevemente a analizar algunos aspectos relativos al sector de la Construcción. Una vez más repetiremos la peculiaridad de este sector de necesitar gran cantidad de mano de obra, y, por otro lado, inmovilizar el capital un período de tiempo mayor que otros sectores productivos.

Una nota común de los países del mercado común ha sido la supresión de trabas al mercado de alquileres de viviendas y locales comerciales e industriales. No obstante esto, la falta de viviendas en los grandes núcleos industriales es patente. Parece una contradicción el hecho de existir un nivel alto de salarios y existir demanda insatisfecha de viviendas. Una de las razones es, indudablemente, el excesivo coste de la construcción, debido al elevado porcentaje de mano de obra, en comparación de otras industrias de costes de instalación similares. Por alto que sea el nivel de salarios de los obreros, siempre existe un límite de gastos que no pueden superar, y si el coste de la vivienda rebasa sus posibilidades, aun ganando mucho, no podrán llegar a ella. De ahí que también en los países del Mercado Común exista la ayuda estatal para animar a los empresarios.

Por ello creemos que, entrando o no, el remedio de la escasez de viviendas no puede desligarse de la protección estatal. En el supuesto de incorporación a la C.E.E., el sector de la Construcción española soportará ventajas e inconvenientes. Ventajas principales: la posibilidad de adquirir maquinaria moderna a precios europeos de competencia, y también la oportunidad de encontrar capitales dispuestos a invertirse en la construcción. Inconveniente grande, el posible éxodo de la mano de obra especializada que en la Construcción viene a suponer 1/6 de sus obreros. Ello agravaría una desproporción ya de por sí muy grande.

En resumen, una cosa está clara, y es que siendo la Construcción el sector que primero refleja cualquier cambio estructural, y siendo la entrada en el Mercado Común un cambio muy grande, hay que irse preparando para abordar la situación. Ya hemos visto cómo el libre comercio de bienes y servicios iniciado por los "seis" ha traído un considerable incremento del nivel de vida. Hay que pensar que al aumentarse el mercado de 180 a 300 millones de habitantes, las condiciones seguirán mejorando, una vez pasado el período duro de adaptación.